

La cultura de la impunidad

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

Tradicionalmente, pero muy en especial durante los pasados 30 años, la descomposición de la política y de los negocios en México ha agravado el tema de la corrupción, pero más delicado aún, el sistema de complicidades y tráfico de influencias que se han convertido en una cultura de la impunidad. Estos hechos, que suceden prácticamente todos los días y que quedan sin investigación y sin castigo, han deteriorado totalmente la vida de la sociedad, incrementado dramáticamente la desigualdad y disminuido el prestigio que México tenía en la comunidad internacional.

Los grandes conflictos y agravios no sólo no se resuelven, sino que se mantienen en el abandono y la indiferencia, con la esperanza de que el tiempo los entierre y permita olvidar los graves problemas y los abusos que han cometido los poderosos y los amigos de aquellos que ejercen el poder. La pregunta obligada es si México podrá avanzar en estas condiciones hacia nuevas etapas de crecimiento, tranquilidad, paz social, estabilidad, justicia y mayor bienestar.

Definitivamente es todo lo contrario. Conforme transcurren los meses, los años y los sexenios, los problemas cada vez se profundizan y se arraigan más en la vida de la sociedad.

Hay muchos, pero muchos casos, que no se han resuelto con apego a la justicia y a la legalidad imparcial. Los ejemplos son innumerables, pero citaré algunos que a todos nos indignan y llenan a los mexicanos de frustración, coraje y desesperación, como los siguientes:

El homicidio industrial de la mina de carbón de Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero de 2006, donde perdieron la vida 65 mineros y más de 10 fueron severamente heridos y sufrieron quemaduras graves. Grupo México, el verdadero responsable de esta tragedia, y su presidente, Germán Larrea Mota Velasco, continúan en la impunidad.

El Grupo Peñoles de Alberto Bailleres también se mantiene en la impunidad, a pesar de la terrible contaminación con plomo y zinc, elementos que ya se detectan en la sangre de cientos de niños y familias de Torreón, Coahuila; la minera ha producido y sigue provocando un irresponsable envenenamiento de cuerpos y almas de inocentes criaturas y personas que han padecido graves problemas que les impiden un desarrollo físico y mental. Esta empresa, Peñoles, sus accionistas y directivos, al igual que Grupo México, continúan bajo la protección oficial y la impunidad.

Qué decir de la terrible tragedia de muertos y heridos y de cientos de hogares en luto que ha dejado la explotación inmisericorde del Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira Elizondo, en sus minas de fierro y de carbón, así como en los procesos de producción siderúrgica, con un descuido total de la seguridad e higiene en los centros de trabajo y en las condiciones generales de labor. Por supuesto que este es otro caso terrible de impunidad vigente, agravado por la deliberada acción fraudulenta de Ancira y socios de mantener a esta empresa en suspensión de pagos desde hace más de 12 años.

El caso de los niños quemados y muertos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde

La Jornada

tampoco se castigó a los responsables de esta evidente y muy delicada negligencia criminal de los dueños y administradores.

Casos como el fusilamiento de más de 20 jóvenes en Tlatlaya, estado de México, sin que hasta ahora exista una investigación adecuada, ni por supuesto responsables de esos hechos aberrantes e inhumanos.

En forma destacada y de renombre mundial, ha sido el asesinato de estudiantes y la desaparición forzada de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, que hasta la fecha sigue sin aclararse, sin que aparezcan los aspirantes a profesores y sin que haya resultados claros en la investigación de esta indignante tragedia, que ha dejado de luto a muchas familias.

No se puede dejar de mencionar el nuevo homicidio industrial de Grupo México, de Germán Larrea, en el caso del derrame de más de 400 millones de litros de agua contaminada de la presa de Jales hacia los ríos Cananea y Sonora, en lo que se ha convertido en la peor tragedia en la historia de la minería de México. Han sido afectados más de 20 mil habitantes de la zona, y contaminada flora y fauna con sustancias altamente cancerígenas, como cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, manganeso, cadmio y otras sustancias químicas tóxicas para la salud humana.

Hasta la fecha Larrea y sus cómplices siguen repartiendo migajas para pretender callar a los pobladores de varias localidades y regiones de esta importante zona agrícola, minera y ganadera de Sonora. Otra vergüenza más que termina, hasta ahora, en la impunidad.

La entrega creciente del territorio nacional mediante concesiones mineras a empresas mexicanas y extranjeras, que a la fecha y de acuerdo con los reportes de Roberto González Amador y del prestigiado columnista Carlos Fernández Vega, ambos de *La Jornada*, asciende hasta casi la mitad de toda la extensión territorial del país. Estas concesiones han

sido entregadas para su explotación a empresas particulares, a pesar de que el suelo y el subsuelo mexicano pertenecen al pueblo y a la nación misma.

En este contexto de la situación real del país cabe preguntarnos: ¿qué estamos haciendo los mexicanos, el gobierno, los empresarios, los estudiantes, los profesores, los trabajadores y los líderes y la sociedad civil para frenar y revertir esto que cada vez corroe y daña más el espíritu y la dignidad humana? O cambiamos este sistema y cultura de impunidad o vamos a destruirnos todos como sociedad, como personas e individuos, como seres humanos y estaremos condenados a vivir en la miseria, la desigualdad, la humillación y sin dignidad.

Es tiempo de reflexionar, pero también de actuar.